

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 22º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-10494-2024
CARATULADO : BUSCHMANN/FISCO DE CHILE-
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticinco

VISTOS

A folio 1, con fecha 07 de junio de 2024, comparecen doña María Alejandra Arriaza Donoso y don Sebastián Alfonso Segura Arriaza, abogados, domiciliados en calle Portugal N°333, torre 23, oficina 3, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en nombre y representación convencional de doña **LORENA BUSCHMANN SOTO**, administradora pública, cédula de identidad N° N°10.512.417-1, domiciliada, en calle Villoslava N° 820, departamento 44, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, quien viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente, por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en Santiago, calle Agustinas N°1225, Piso 4, de esta ciudad.

Fundamentan su demanda realizando una lata exposición de los hechos reconocidos por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Informe Valech, caracterizando la misma, señalando que la demandante de autos fue calificada como víctima en el listado de presos políticos y torturados, elaborado por la Comisión con el **N°1298**.

Reseñan que, el día 11 de julio de 1988, en una manifestación pública en contra del hambre y la miseria, la demandante concurrió junto a otros compañeros de las Juventudes Comunistas a la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, cerca de la casa central de la Universidad de Chile. Sin embargo, en un momento de la movilización, Carabineros comenzó a



Foja: 1

agredir a los manifestantes, por lo que, la demandante, junto a otras personas, corrieron por calle Arturo Prat, buscando esconderse en calle París, ingresando a un estacionamiento. Allí fue detenida por un piquete de Carabineros, quienes la golpearon cuando ya estaba reducida en el suelo. Entre groserías, golpe y amenazas fue conducida a un bus de la Institución que estaba con muchos detenidos en su interior.

Relatan que el bus se desplazó a otro lugar y se estacionó frente a la iglesia San Francisco. Estando detenida en el bus fue reconocida desde la calle por un grupo de jóvenes quienes gritaban su nombre para denunciar su detención y protegerla. Así, Carabineros al percatarse que era hija de Sergio Buschmann (reconocido dirigente comunista de la época), comenzaron a hostigarla y amenazarla. La actora sintió mucho temor por lo que pudiese ocurrirle de ahí en adelante.

Por lo anterior, fue sacada por Carabineros del bus y trasladada a un camión de detención. En el trayecto, continuaron pateándola, insultándola y manoseándola. Producto de las vueltas que dio el camión, se desorientó y no sabía dónde la conducían. Después se enteró que había sido llevada a un recinto policial, ubicado en calle Chiloé. Allí fue retenida hasta altas horas de la noche e interrogada, para luego ser trasladada a una Comisaría de mujeres. En ese lugar, fue llevada a una oficina donde ingresó junto a una funcionaria y otra persona que dijo ser médico y que quería evaluarla. Le pidieron que se desnudara a lo cual Lorena se rehusó, siendo amenazada con ser desnudada por Carabineros. Con mucho pudor, impotencia y rabia se despojó de su ropa; la supuesta médico la obligó a caminar por el lugar desnuda y a asumir posiciones forzadas. Esta situación duró algunos minutos y luego la retornaron al lugar en que se encontraban otras detenidas.

Manifiestan que doña Lorena Buschmann Soto permaneció en dicho recinto alrededor de 4 días, posteriormente fue llevada a la cárcel de calle Santo Domingo, donde ingresó en calidad de incomunicada en una celda y estuvo alrededor de 2 semanas en condiciones de aislamiento. Hace presente que, al momento de su detención fue interpuesto un recurso de amparo a su favor, bajo el Rol N° 846-88. Señala que permaneció privada de libertad por 21 días.



Foja: 1

Precisan que la actora en aquella época sólo tenía 21 años y no se encontraba cometiendo delito alguno, simplemente había concurrido a la manifestación. Y por lo demás, anterioridad a esta detención, y solo siendo una niña, se habían interpuesto dos recursos de amparo preventivo en favor de ella, rol 1349-86, debido a que desde el 1º septiembre de 1986 fue objeto de vigilancia por personas que se movilizaban en distintos vehículos y otras que se instalaban en las afueras de su domicilio. Misma situación puede advertirse respecto del recurso de protección rol 858-87.

Respecto del daño causado a la demandante, aseveran que presenta recuerdos intrusivos, sueños angustiosos recurrentes, reexperimentación subjetiva del evento traumático, intensa respuesta psicológica y fisiológica negativa a cualquier recordatorio del evento traumático. Síntomas de evitación persistente, entumecimiento emocional y síntomas persistentes de hiperexcitación que no estaban presentes antes del evento traumático. Los síntomas le provocan angustia clínicamente significativa y deterioro en sus relaciones familiares y laborales.

Hacen presente que la detención y tortura ha tenido un gran impacto en su vida. Se observa falta de concentración, deterioro de la memoria y tendencia al aislamiento, sufriendo períodos prolongados de depresión y ataques de pánico.

Finalizan su presentación realizando consideración de derecho.

A folio 6, consta notificación personal practicada a la demandada, el día 21 de junio de 2024.

A folio 7, la demandada contestó el libelo enderezado en su contra, pidiendo su rechazo. Previa síntesis de los hechos relatados en la demanda opuso las excepciones de reparación integral, y en segundo lugar, excepción de prescripción extintiva de acciones, en un planteamiento principal, y otro, subsidiario.

En cuanto a la **excepción de reparación integral**, alegó la improcedencia de la pretensión del actor, porque ya habría sido indemnizado. Principia efectuando una relación del marco general de las reparaciones ya otorgadas, dentro de la denominada “Justicia transicional”, indicando que dentro de un concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de



Foja: 1

verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. De esta forma, estos programas incluirían beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, según quedó plasmado en la Ley N°19.123, Ley N°19.234 y la Ley N° 19.992 y otras normas jurídicas conexas, las cuales describe en extenso. Añade que existe identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas, puntualizado que puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables, por lo que las pretensiones acá indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

En segundo lugar, dedujo **excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo preceptuado por el artículo 2332 del Código Civil, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo normativo**. Funda su defensa en que conforme el relato de la parte demandante, las acciones han sido posibles durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo. Agrega, que los tratados internacionales a los que adscribió el Gobierno de Chile no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, por lo que, debiendo recurrirse al derecho común, y habiendo transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo, corresponderá acoger la presente defensa.

Así las cosas, concluye que el plazo de 4 años establecido por la norma citada ha transcurrido con creces. Sin perjuicio de ello, y para el evento en que el Tribunal estimare que dicha norma no es aplicable en el caso de autos, **opuso la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil en relación con el artículo 2514 del mismo cuerpo legal**, fundado en que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción interpuesta, ocurrida



Foja: 1

el 21 de junio de 2024--, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil. Refrenda su defensa con jurisprudencia y normas de derecho internacional, señalando particularmente que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, procede el rechazo de la demanda por la prescripción de la acción civil.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formuló alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y al monto pretendido, como se dirá a continuación.

Sostiene que, tratándose del **daño puramente moral**, la finalidad de restablecimiento del equilibrio destruido por el hecho ilícito no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél, por cuanto el daño moral no se borra por obra de la indemnización, y en tanto la pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba, razón por la cual la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

De tal forma, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado, conforme a las leyes de reparaciones N°19.123, N°19.234, y N°19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente, y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Además, respecto a los intereses y reajustes, postula su improcedencia, toda vez que, si bien los actores solicitan su pago desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo de las sumas indemnizatorias, a la fecha de interposición de la demanda de autos, o de su notificación, y mientras no



Foja: 1

exista sentencia firme o ejecutoriada, no existe obligación alguna de indemnizar de parte de su representada, no existiendo de esta forma suma alguna que reajustar. Del mismo modo, esgrime respecto de los intereses que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado en el cumplimiento de una sentencia. Por lo anterior, concluye que en el hipotético caso en que se acogieren las acciones de autos y se condenare a su representado al pago de una suma indemnizatoria, sus reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En conclusión, en virtud de todo lo expuesto, la demandada solicitó tener por contestada la demanda, y, en definitiva, rechazar íntegramente la acción indemnizatoria interpuesta en su contra, con expresa condena en costas. En subsidio, para el evento que el tribunal acoja parcialmente la demanda, solicita que el monto indemnizatorio sea rebajado sustancialmente, en atención a los antecedentes esgrimidos en su defensa.

A folio 11 y 13, se evacuan los trámites de **réplica** y **dúplica**, respectivamente.

A folio 16, con fecha 13 agosto de 2024, **se recibió la causa a prueba**.

A folio 35, con fecha 17 de enero de 2025, **se citó a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, comparecen don Alberto Espinoza Pino y doña Marta de la Fuente Olguín, abogados, en representación convencional de doña **LORENA BUSCHMANN SOTO**, quienes vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios en procedimiento de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, todos ya individualizados, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la parte expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que, la demandada, contestando la acción dirigida en su contra, solicitó su total rechazo, con costas, oponiendo las excepciones de reparación integral, y de prescripción extintiva de la acción indemnizatoria,



Foja: 1

en un planteamiento principal y otro subsidiario. Asimismo, en subsidio de las excepciones opuestas, formuló alegaciones respecto a la naturaleza y monto de la indemnización reclamada, y la improcedencia de aplicar reajustes e intereses en la forma pedida por la demandante. En subsidio de todo ello, solicitó, para el evento de acogerse la demanda, rebajar sustancialmente el monto pedido a título de indemnización, todo como fuere expuesto latamente en la primera parte de esta sentencia.

TERCERO: Que, en apoyo a su pretensión, la **parte demandante** produjo la siguiente prueba, la que no fue objetada por la contraria.

A.- INSTRUMENTAL:

Bajo el folio 24

1.- Copia de carpeta de ingreso, antecedentes y calificación de víctima de prisión política y tortura de doña Lorena Buschmann Soto, entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos

2.- Informe psicológico y psicosocial de daño de doña Lorena Buschmann Soto, suscrito por doña Marianna Cattoni Poblete, psicóloga clínica, don José Luis Tejada Guíñez, médico psiquiatra, don José Miguel Guzmán Rojas, trabajador social y director ejecutivo, de la ONG CINTRAS.

3.- Nómina de personas reconocidas como víctimas elaboradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde la demandante, doña Lorena Buschmann Soto, aparece en el número 1298.

4.- Certificado de nacimiento de doña Lorena Buschmann Soto, emanado del Registro Civil e Identificación, emitido con fecha 3 de diciembre de 2024.

Bajo el folio 25

5.- Sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa civil N° de ingreso 2757-2024, caratulada San Martín/Fisco de Chile, de fecha 8 de noviembre de 2024.

6.- Sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, dictado con fecha 20 de enero de 2022, en causa civil N° de ingreso 8442-2020.

7.- Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema en autos caratulados “Marcón con Fisco de Chile” causa Rol 22856-2015



Foja: 1

8.- Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caratulados Ordenes Guerra y Otros VS Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018.

9.- Copia del Capítulo VIII “Consecuencias de la Prisión Política y Tortura” del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y tortura.

CUARTO: Que, a su turno, la parte demandada rindió la siguiente prueba en orden a acreditar sus dichos.

Instrumental.

Bajo el folio 29

1.-Oficio remitido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ORD DSGT N° 29531/2024, mediante el cual informa acerca de los beneficios reparatorios del Estado que ha obtenido la demandante doña Lorena Buschmann Soto, de fecha 24 de noviembre de 2024.

QUINTO: Que, en primer lugar, corresponderá hacerse cargo de las excepciones esgrimidas por la demandada, las cuales no tienen por mérito tergiversar o enervar la responsabilidad reclamada en cuanto a la existencia del hecho dañoso, sino que más bien dicen relación con la reparación de los vejámenes de que fue objeto el demandante, como asimismo con la oportunidad en que se solicita la indemnización pedida, y en su caso, monto y forma de reajuste.

SEXTO: En cuanto a la excepción de reparación integral. Que, el Fisco de Chile, debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado, alegó como primera excepción la reparación integral de los perjuicios sufridos por el demandante por medio de la entrega de beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N°19.123, N°19.234, N°19.992 y N°20.874, que recibió el actor, así como por otras vías diferentes a la simple entrega de una cantidad de dinero, constituidas por actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a las violaciones a los Derechos Humanos, como son la construcción de memoriales, Museo de la Memoria y Derechos Humanos, establecimiento del día nacional del detenido desaparecido, entre otras. En este escenario, alega que existe identidad de causa entre lo que el demandante reclama por concepto de indemnización de perjuicios y las reparaciones realizadas.



Foja: 1

Para resolver, es necesario tener en consideración que la acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado incoada en autos tiene por objeto reparar al demandante en los perjuicios sufridos como consecuencia del actuar de funcionarios estatales.

Dicho lo anterior, nuestro derecho interno regula la acción de indemnización en sede extracontractual por todo daño que sufra una persona, sin distinción alguna, especialmente según el estatuto de normas contenidas en los artículos 2.314, 2.316 y 2.329 del Código Civil, estableciendo que todo daño debe ser reparado por quien lo causó.

En este orden de ideas, las pensiones establecidas en las leyes que cita el demandado, cuya existencia y monto ha quedado acreditado con el documento incorporado a **folio 29** de autos, constituyen a juicio de esta sentenciadora beneficios sociales en dinero tendientes a cumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Chile referentes a la dignificación de las víctimas y la búsqueda de un reconocimiento de los vejámenes sufridos y una mejor calidad de vida para las familias directamente afectadas, y la obtención, en definitiva, de una democracia plena y paz social, dentro del marco de la denominada “justicia transicional”. En consecuencia, las reparaciones en dinero u otros beneficios percibidos por el actor, como por ejemplo una pensión mensual, que será percibida por aquél de manera vitalicia, si bien constituyen una reparación en su calidad de víctima de violaciones a los Derechos Humanos, no resultan incompatibles con la suma reclamada a título de indemnización de perjuicios, principalmente porque dichos beneficios se aplicaron con estándares y criterios objetivos, en forma genérica y sin distinción o correlación necesaria con el daño efectivamente padecido por el demandante en particular, por lo que no es posible concluir que los daños causados a éste han sido reparados en su totalidad, especialmente el daño moral, que implica el sufrimiento o dolor que el hecho dañoso ocasiona en el aspecto físico o psicológico a una persona, y por ende, de carácter personalísimo.

Ahora bien, respecto a aquellas reparaciones denominadas como “simbólicas”, estas obedecen a esferas y finalidades jurídicas diferentes, por lo que las consideraciones que se tuvieron en cuenta para determinar a los beneficiarios de dichas reparaciones no resultan vinculantes para la



Foja: 1

procedencia de la indemnización civil, razón por la cual se desestimaré completamente esta defensa de reparación integral del daño, como se dirá en la parte resolutive de este fallo.

SÉPTIMO: En cuanto a la excepción de prescripción extintiva.

Que, en segundo lugar, la demandada opuso la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, por haber transcurrido a su juicio con creces el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, contados desde la fecha en que habrían ocurrido los hechos relatados por la demandante, aun cuando se entienda suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la víctima demandante de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia. En subsidio de la excepción de prescripción extintiva de 4 años, invocó la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515 del Código de Bello, sosteniendo que desde que se hizo exigible el derecho a indemnización hasta la fecha de notificación de la demanda--, hecho acaecido el día **21 de junio de 2024**--, ha transcurrido con soltura dicho plazo, aún estimado la suspensión del plazo de prescripción durante el período de la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte. Refuerza su defensa afirmando que el principio general que debe regir la materia es el de la prescripción de la acción de responsabilidad civil, por cuanto no existe tratado internacional alguno que contenga norma que declare su imprescriptibilidad para el caso sublite.

Sin perjuicio de lo sostenido por la demandada, a juicio de esta sentenciadora, la naturaleza de la acción pretendida excede con creces el marco de la regulación interna sobre prescripción extintiva de las acciones civiles, el cual representa un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, por lo que será necesario recurrir a normas que emanan del derecho internacional de Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

En consecuencia, la aplicación de las normas de responsabilidad civil extracontractual contenidas en nuestro derecho interno pugnarían con la



Foja: 1

obligación de resarcir íntegramente los daños causados por crímenes de lesa humanidad, que ciertamente incluye el ámbito patrimonial, obligación que se contiene en normas de derecho internacional de Derechos Humanos incorporadas a nuestra Constitución Política de la República por mandato de su artículo 5°.

En atención a lo dicho, las reglas de derecho internacional deben tener una aplicación preferente, según mandato del citado artículo, por sobre las disposiciones de derecho interno que, de ser aplicadas, permitirían eludir responsabilidades al Estado y no reparar íntegramente el daño causado a las víctimas. Lo anterior, se aviene con lo establecido en la Convención de Viena, sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que en su artículo 27 dispone que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, y que, de hacerlo, cometen un ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Se concluye así, que la fuente de la responsabilidad civil del Estado con ocasión de violaciones de los Derechos Humanos se encuentra en principios y normas del derecho internacional.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados; dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la comisión de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la Carta Política, sin que sea posible estimar que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, lo que importaría transgredir preceptos constitucionales.

En suma y, a juicio de esta sentenciadora, la acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible, por lo



Foja: 1

que se rechazará la excepción de prescripción extintiva deducida, tanto en su solicitud principal como subsidiaria, como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

OCTAVO: Que, habiéndose desechado las excepciones opuestas, corresponde analizar el fondo de la acción deducida, esto es, la procedencia de indemnizar a la demandante por el daño moral producido con ocasión de la detención y torturas que padeció por agentes del Estado, y en su caso, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose por cierto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada relativas al monto y naturaleza de la indemnización, así como a la improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el demandante.

NOVENO: Que, el asunto sometido a decisión de este tribunal versa sobre el daño moral que habría sufrido el demandante a consecuencia de su detención y torturas en manos de agentes del Estado, y la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por tales hechos, razón por la cual corresponde determinar, en primer lugar, la existencia de dicha responsabilidad, y, en consecuencia, la existencia del hecho dañoso.

En este sentido, ha de considerarse como un **hecho público y notorio** que en el período comprendido entre el 11 de septiembre del año 1973 y hasta el término del gobierno de facto detentado por las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, existieron casos en nuestro país en que abiertamente se violentaron los Derechos Humanos y esenciales de diversas personas por parte de agentes del Estado. Lo anterior, ha sido reconocido por diversos tribunales que han destacado la existencia de organizaciones al interior del Estado, tendientes a establecer un régimen sistemático de represión respecto de personas cuyas ideas o actividades contravenían la ideología y órdenes impartidas por el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte.

A mayor abundamiento, tales hechos no han sido discutidos en este proceso por la partes, y por tanto, constituye un hecho pacífico, resultando inoficioso adentrarse a determinar la existencia de ese ilícito, y conforme al mérito de los instrumentos descritos en el considerando tercero, a los que se les otorga valor probatorio, según su naturaleza, no objetados ni impugnados, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N°3 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra acreditado que el demandante



Foja: 1

fue víctima de detención y torturas cometidas por agentes del Estado de Chile, constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos.

Ahora bien, en cuanto a la imputación de responsabilidad estatal, a la luz de tales antecedentes, ésta se configura claramente, lo cual fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a la obligación de los órganos del Estado de someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y específicamente lo preceptuado en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en las reparaciones simbólicas otorgadas por las Leyes N°19.123, N°19.234, N°19.992 y N°20.874 al demandante de autos.

DÉCIMO: Que, sentado lo anterior, corresponde determinar la existencia del daño moral sufrido por la actora.

Que, en reiterada jurisprudencia, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

Que, en este sentido, de la prueba descrita, especialmente, del mérito de los instrumentos signados bajo los numerales 1) y 3) del motivo tercero precedente, los cuales serán valorados conforme lo dispone el artículo 342 N°3 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1700 del



Foja: 1

Código Civil, se tendrá por establecido que la demandante fue detenida el día 11 de julio de 1988 por Carabineros de Chile en el contexto de una marcha contra el hambre y la miseria, cuando tenía 21 años de edad, siendo recluida primero en una Comisaría de Santiago, y posteriormente, en la cárcel de mujeres de Santo Domingo. Dichos antecedentes se reflejan en el reconocimiento de la Comisión Valech como víctima de prisión política y tortura, durante el Régimen Militar, figurando con el **N° N°1298**.

Sumado a lo anterior, se debe dejar por asentado que doña Lorena Buschmann Soto, vivió una serie de experiencias traumáticas en la época de dictadura militar, pues, su padre don Sergio Buschamann Silva—según da cuenta el certificado de nacimiento acompañado a folio 24--, era militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, opositores al régimen impuesto. Así, consta en la carpeta de ingresos, antecedentes y calificación, certificado emitido por la secretaria ejecutiva del Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, de fecha 15 de marzo de 2007, donde se consigna que la demandante fue atendida por el Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad desde septiembre de 1986. Así, señala: *“En los archivos se consigna que en septiembre de 1986, fue interpuesto un recurso de amparo preventivo en favor de la Sra. Buschman, (sic) rol 1349 – 86, debido a que desde el 1° de septiembre de 1986 fue objeto de vigilancia por personas que se movilizaban en distintos vehículos y otras que se instalaban en las afueras de su domicilio. Asimismo, su padre, Sergio Buschman Silva, (sic), quien se encontraba procesado y detenido en la Penitenciaría, al momento de los hechos, mientras se encontraba en poder de la Central nacional de Informaciones (C.N.I.), fue amenazado con la detención de la afectada”*. Prosigue: *“En agosto de 1987, fue interpuesto un recurso de amparo preventivo en su favor, rol 858 – 87, debido a que su domicilio fue objeto de vigilancia y como prevención a las posibles represalias de que pudiese ser víctima, a raíz de la fuga de su padre de la Cárcel de Valparaíso, el 12 de agosto de 1987. El 11 de julio de 1988 fue detenida por carabineros durante las manifestaciones realizados con el motivo de la “Jornada Nacional frente a la Pobreza, el Hambre y la Miseria”, convocada por el Comando Unitario de Pobladores (CUP). La afectada fue conducida a la Comisaría, quedando detenida en virtud del*



Foja: 1

Decreto Exento del Ministerio del Interior N°6825, por el plazo de cinco días. Al momento de su detención fue interpuesto recurso de amparo a su favor, Rol N° 846 – 88”.

De otro lado, fue acompañado a folio 25 de autos, como se individualiza en el número 2 del motivo tercero precedente, Informe Psicológico y Psicosocial de Daño, emitido por los profesionales del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS, integrados por un grupo interdisciplinarios de psicólogos, psiquiatra y trabajador social. En él se relata el motivo de la evaluación y la metodología empleada, haciéndose presente que la demandante se encuentra en proceso de psicoterapia en dicho Centro desde julio de 2022. Asimismo, se consignan antecedentes y relato de su historia desde el golpe militar, donde se plasman distintas experiencias traumáticas vividas por la actora en el contexto del régimen dictatorial. Debido a ello, su familia fue exiliada a Suecia, a una temprana edad de la demandante, volviendo a Chile en 1980, donde fue víctima junto a su familia de una serie de allanamientos. Posteriormente, debió huir a Nicaragua, y luego de una serie de situaciones familiares, logró regresar nuevamente a Chile. Por lo anterior, no contó con una base escolar, repercutiendo en su acceso a la Educación Superior.

Por otra parte, impresiona el relato que se consigna en dicho Informe en cuanto a sus vivencias durante la dictadura: *“No fui niña, no fui joven, iba unos días al colegio y había que desaparecer porque estaba en riesgo la vida de todos, no hice amistades, no tengo fotos, no sé cómo me veía, como era mi imagen de chica...fue solo en Nicaragua (1982 – 1984) que sentí más aclama, salimos un poco de miedo, de la violencia”.* Continúa: *“Nos pescaban y nos íbamos un tiempo, arrancando, sin saber cuándo volveríamos al colegio, a nadie le importaba qué pasaba con nosotras, si nos atrasamos si no entendíamos después las materias...las amistades eran complicadas, no podíamos hablar, decir nada de nuestra vida familiar, era todo intermitente, sin certezas, andábamos en el aire...a veces nos quedábamos con tías, se llevaban a los papás presos...otras veces se los llevaban y quedamos solas, hasta que mi abuela llegaba a buscarnos, comíamos tallarines crudos, vivíamos en Bascuñán con Rondizzoni en Santiago, cerca de la fábrica Yarur...a mis 9 años partimos a Suecia, nos*



Foja: 1

metieron a un colegio sin saber el idioma, pero el profe nos enseñó, aprendíamos rápido. Éramos comunistas, a los comunistas los persigue, así que no podíamos decir nada, esa era la instrucción de mis papás. Tengo pocos recuerdos claros de Suecia, pero ahí hubo más rutina, había harto racismo, éramos los cabeza negra, había un tipo que me perseguía en el colegio, me daba miedo, era mayor, me peleaba a combos, había sillazos, pero también logre jugar, tener amigos, patinar, esquiar, andar en trineo, pasaba poco con mis papás, trabajaban todo el día, salías oscuro y volvías oscuro a casa, eran pocas horas de luz, estábamos en el colegio casi todo el día, teníamos todas las necesidades básicas cubiertasesto fue de los 9 a los 14 años, ahí de vuelta a Chile y fue terrible, del país más desarrollado del mundo llegue a un colegio dentro de una población donde me pegaba el profesor, yo había aprendido otro sistema, con todos los cambios tenía mala ortografía y me castigaban, pase frío, era la pobreza extrema en la población Ochagavía, fue un inmenso shock. Cada vez que llegábamos a algún lugar nos bajaban de curso para adaptarnos, estuve dos años ahí y nos fuimos a Nicaragua.....ese sí fue el período más feliz de mi vida. Fui libre, a pesar de la pobreza, todo era escombros todos corrían en la calle, era lo opuesto a Suecia, pero me sentí adolescente, sin persecución, poder ser yo misma, ahí no estaba mi mamá, sólo mi papá, que nos hizo elegir si irnos a Chile o quedarnos en Nicaragua. Volvimos a Chil, yo a 2do. Medio, había que decir que veníamos de Panamá...fue otro shock volver, llegamos a un colegio en el centro, acá estaban las marchas...después de deambular por varios colegios terminé en el Luis Campino, que en ese tiempo tenía una nocturna mixta, me ingresaron a 3ero Medio y ahí partí, hice 3ero y 4to y salí de 20 años, todos éramos mayores, estaba más tranquila ahí, buenos profes, nunca un mal trato. Mi escolaridad en general fue una tortura”.

Es necesario señalar que este Informe será valorado según su naturaleza de instrumento privado, el que, sin perjuicio de no haber sido reconocido en juicio, reviste caracteres de gravedad y precisión suficiente, sirviendo de base para una presunción judicial en los términos del artículo 426 del Código del Procedimiento Civil, además de ser concordante con la demás prueba instrumental acompañada a los autos, razón por la cual ha



Foja: 1

formado convencimiento en esta juez, quien le otorga valor de plena prueba.

En definitiva, mediante la prueba aportada en autos, descrita y valorada en la manera señalada, será posible tener por establecido que **doña Lorena Buschmann Soto**, fue víctima de violaciones a sus Derechos Humanos a causa de agentes del Estado, en la forma que manifestó en su libelo.

Asimismo, es dable sostener que la demandante de autos ha padecido consecuencias psicológicas que producen efectos en ella hasta la actualidad, donde el daño moral reclamado derivado de la detención ilegal y torturas sufridas por la señora Buschmann se perfilan como una consecuencia directa de la actuación de los agentes estatales, atendidas sus circunstancias y características, estableciéndose por tal circunstancia el vínculo o nexo causal entre el daño reclamado por aquella y el agente causante de éste.

UNDÉCIMO: Que, determinada tanto la existencia del hecho dañoso como la efectividad de haber sufrido la demandante daño moral, es necesario fijar su cuantía en dinero. Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial, la magnitud y extensión del daño, a fin de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a la víctima.

Cabe hacer presente que este tribunal comprende cabalmente que la suma de dinero que se conceda a título de indemnización en nada destierra el dolor y aflicción sufrido por el demandante debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado, momento en que desnaturalizándose y trastocándose los fines del Estado, aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de éstos, encontrándose entre ellos **doña Lorena Buschmann Soto**.

De esta forma, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión a esta demandante durante tan largo tiempo, corresponde ahora que le devuelvan su amparo y morigere en cierta extensión los efectos perniciosos de su obrar, por lo que la acción deducida habrá de prosperar.



Foja: 1

En consecuencia, esta magistrada tomará en especial consideración que, sin perjuicio que su detención se produjo siendo mayor de edad, --a los 21 años--, se vio enfrentada a situaciones traumáticas desde pequeña, a propósito de la oposición de sus padres al régimen imperante, debiendo exiliarse en dos oportunidades, lo que trajo consigo una serie de consecuencias en su desarrollo, a nivel psicológico que perduran hasta hoy.

Asimismo, se tomará en consideración la detención ocurrida en el mes de julio de 1988, la que se extendió por 20 días, y durante la cual sufrió torturas, amenazas, vulneraciones a su dignidad como persona y mujer, y todas las represalias a las que se vio expuesta por ser hija de un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

De esta forma, en el informe psicológico antes referido, se consigna que la demandante presenta una estructura de personalidad de hiperactivación ansiosa, teniendo preocupaciones rumiantes con tensión psíquica y correlato físico, señalando el citado informe que: *“(...) dando cuenta de un sistema de alerta crónicamente desregulado, descompensado que se intensifica con el estallido social octubre 2019. Se observó Hiperreactividad emocional interpersonal como rasgo de la personalidad. Emociones de rabia desregulada y sentimientos de ira reactivos a desafíos interpersonales y contextos sociopolíticos. Desconfianza básica. Evidente presencia de triada: tensión-desconcentración-insomnio. Tabaquismo crónico asociado a fluctuaciones de estado ansioso.*

Se concluye, en ese periodo: Trastorno Ansioso curso crónico e Insomnio Refractario. Trauma Psicosocial y del Desarrollo, Personalidad Organizada en Trauma”.

Concluyen los evaluadores que: *“Es evidente el trauma vincular o apego disfuncional que se fue dando en los primeros años de vida de Lorena, con experiencias de abandono y negligencia en ciclos vitales de alta vulnerabilidad, en un contexto sociopolítico que se incrusta en la familia nuclear, encontrando a padres dañados centrados en sobrevivir, con escasos recursos para establecer un espacio de seguridad para sus hijas, malos tratos, rigidez, violencia cruzada entre los padres, y de la madre hacia las hijas, situaciones de mucha exposición y extremo descuido, fueron dejando huellas en su forma de relacionarse a futuro, en la construcción de*



Foja: 1

identidad, autovaloración y autorregulación emocional, al estar en constante estrés y peligro gran parte de su infancia y adolescencia” y agrega que: “La importancia de la justicia en casos como el de Lorena, cumple una función crucial, ya que es ella quien se asume como sobreviviente de primera generación, siendo víctima directa de la violencia de Estado desde temprana edad, que fue tiñendo toda su red familiar paterno/materno/filial y de cuidados y su comunidad directa. Lorena fue haciéndose cargo, dentro de sus posibilidades y asumiendo los costos de las huellas psicológicas, somáticas, sociales, circunstancias ya expuestas en este informe. Es por esto, que el Estado, debe hacerse cargo del daño causado directamente a su desarrollo vital en todas sus áreas. Como señala el Dr. Carlos Madariaga, “la impunidad constituye el mecanismo retraumatizador por excelencia”. ”

En definitiva, mediante la prueba antes descrita y valorada en la manera señalada, será posible tener por establecido que la demandante, doña Lorena Buschmann Soto sufrió y sufre efectos psíquicos y morales por la experiencia vivida con ocasión de la dictadura militar en Chile, y la persecución que le tocó padecer, en manos de agentes del Estado de Chile, lo que le produjo consecuencias psicológicas en ella, cuyos efectos se han mantenido a pesar del transcurso del tiempo.

De esta forma, a la luz de los antecedentes que obran en autos, descritos y valorados con anterioridad, se fijará la indemnización de perjuicios en la suma de **\$70.000.000 (setenta millones de pesos)**, la que deberá pagar el Estado a la demandante, por concepto de daño moral.

Al respecto, cabe tener presente numerosa jurisprudencia reciente de Tribunales superiores de Justicia que, sin ser vinculante para este tribunal, en circunstancias análogas, han fijado indemnizaciones de montos similares.

Como última reflexión, resulta necesario mencionar que, sin desconocer esta sentenciadora que las demandas por daño moral derivado de las consecuencias perniciosas de la violencia extrema ejercida por agentes del Estado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte, han aumentado considerablemente los últimos años, lo cierto es que esta juez, al fijar las sumas por concepto de daño moral, busca una reparación efectiva del daño causado, siempre fundándose en criterios definidos y propios de cada caso, pues a pesar de la masiva presentación de demandas ante los



Foja: 1

Tribunales de Justicia para esta magistrada cada caso es único, y aun cuando las circunstancias vividas por cada demandante pueden ser similares, dado el tipo de torturas aplicadas, cada vivencia reviste características especiales, razón por la cual la suma concedida por indemnización del daño moral busca ser reflejo de aquello, y no de una suma estándar, producto de la gran cantidad de indemnizaciones perseguidas por estos mismos hechos ante distintos tribunales del país.

DUODÉCIMO: Que, la suma referida en el considerando precedente se pagará reajustada de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, I.P.C., desde la fecha en que quede firme la presente sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización. Junto a lo anterior, tal suma deberá pagarse aumentada con los intereses corrientes aplicados desde la fecha en que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, todo conforme a la liquidación que se practicará oportunamente en la Secretaría de este Tribunal.

DÉCIMO TERCERO: Costas. Que, en cuanto a las costas de la causa, cada parte soportará las propias, en razón de no haber resultado totalmente vencida la parte demandada.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 24, 1.700, 1.706, 1.712, 2314, 2.316, 2.329, 2.332, 2.492, 2.514, 2.515 y siguientes del Código Civil; artículos 138, 140, 144, 160, 170, 254, 342, 358, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1, 5, 6, 7, 19, 20 y 38 de la Constitución Política de la República de Chile; artículos 2, 3, 4 y 44 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado N° 18.575; y disposiciones pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención de Ginebra; y demás instrumentos del derecho internacional pertinente, se declara:

I.- Que, se **RECHAZAN** las excepciones de reparación integral, y de prescripción extintiva de la acción indemnizatoria, tanto en su planteamiento principal como subsidiario, deducidas por la parte demandada.



Foja: 1

II.- Que, se **ACOGA PARCIALMENTE** la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral deducida a folio 1 de autos, por doña **LORENA BUSCHMANN SOTO**, y se condena a la demandada a pagar a la demandante la suma de **\$70.000.000** (setenta millones de pesos) por concepto de daño moral, debidamente reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, I.P.C., y aumentada con los intereses corrientes, ambos—reajustes e intereses--, calculados desde la fecha en que quede firme esta sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, todo según liquidación que se practicará en su oportunidad.

III.- Que, **CADA PARTE** soportará sus costas.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol C-10494-2024

Pronunciada por doña Lorena Isabel Cajas Villarroel, Jueza Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticinco**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KJMWXTTZVMQ

